

EL PRINCIPIO DEL BIENESTAR FRENTE AL PRINCIPIO DEL MERCADO*

LUDWIG VON MISES

I

LA REQUISITORIA CONTRA LA ECONOMÍA DE MERCADO

Las objeciones que algunos defensores de la *Sozialpolitik* formulan contra la economía de mercado se basan en el desconocimiento de la economía. Repiten una y otra vez todos los errores que los economistas hace tiempo que han refutado. Atribuyen al funcionamiento del mercado consecuencias que no son sino obligada secuela de las medidas anticapitalistas que ellos mismos recomiendan como reformas necesarias y beneficiosas. Atribuyen a la economía de mercado la responsabilidad de los inevitables fallos y frustraciones del intervencionismo.

Estos propagandistas suelen acabar reconociendo que la economía de mercado, a fin de cuentas, no es tan mala como sus «no ortodoxas» teorías quisieran hacernos creer. Porque, en definitiva, es el sistema que más y mejor produce. Incrementa día a día la calidad y la cantidad de cuanto la gente anhela. Ha elevado el nivel de vida de las masas a cimas jamás soñadas. Pero, replica el intervencionista, el mercado es recusable desde el punto de vista social. Además, el capitalismo no ha suprimido la pobreza y la miseria; privilegia a una minoría de poderosos a costa de la mayoría; resulta íntimamente injusto. El principio del beneficio debe ser sustituido por el principio del bienestar.

* Capítulo XXXV de *La acción humana*, Unión Editorial, Madrid, 2015, pp 985 a 1008.

Podemos interpretar el concepto de bienestar de manera que pueda ser aceptado por la inmensa mayoría de quienes no son ascetas. Ahora bien, cuanto más ensanchamos el concepto, menos preciso y específico resulta su contenido. Acabaremos por predicar simplemente la categoría típica de toda acción humana, es decir, el deseo de suprimir la insatisfacción en la medida de lo posible. Puesto que se reconoce universalmente que este fin se puede alcanzar más fácilmente, e incluso exclusivamente, mediante la división social del trabajo, los hombres cooperan en el marco de la vida social. El hombre social se diferencia del hombre autárquico en que se interesa por el bienestar de sus semejantes y amplía el campo de su solicitud más allá del círculo de la propia familia. Se acomoda a las exigencias de la vida en sociedad, pues comprende que sólo el progreso del semejante le permite a él mejorar de condición. En este sentido, puede decirse que mediante la cooperación social el hombre pretende conseguir la mayor felicidad para el mayor número posible. Es realmente difícil encontrar alguien que no estime del máximo interés social alcanzar este objetivo o que llegue a afirmar que *no* se debe procurar hacer lo más feliz posible al mayor número. Los ataques dirigidos contra la célebre frase de Bentham se basan en ambigüedades o errores acerca del concepto de felicidad, pero siempre queda la tesis básica: que conviene procurar que el bien (sea el que fuere) alcance al mayor número posible.

Pero si interpretamos el *bienestar* en este sentido, el concepto está vacío de cualquier significado específico. Se justifica así cualquier tipo de organización social. En efecto, no han faltado defensores de la esclavitud, convencidos de que bajo ella es como más feliz resultaba el hombre de color; en los estados sudistas hay blancos para quienes la segregación racial no beneficia menos al negro que al blanco. La tesis básica del racismo de un Gobineau o del nazismo consistía en afirmar que las razas superiores deben prevalecer sobre las inferiores precisamente para hacer a éstas felices. Es claro que un principio tan amplio, con el que cualquier organización social puede defenderse, no tiene valor científico.

Ahora bien, para los partidarios del bienestar el concepto tiene un significado preciso. Emplean intencionadamente un término cuya connotación generalmente aceptada evita cualquier oposición. En efecto, ningún hombre honrado puede oponerse a que la

gente sea lo más feliz posible. Así las cosas, se aseguran el triunfo al arrogarse el monopolio del bienestar. Ponen sus ideas a salvo de cualquier crítica atribuyéndoles una apelación cara a todo el mundo. Su terminología implica que quienes se oponen a sus ideas son perversos explotadores deseosos tan sólo de anteponer sus intereses egoístas al bienestar de la mayoría.

La tragedia de la civilización occidental consiste precisamente en que gente razonable pueda recurrir impunemente a tales artificios silogísticos. Hay sólo dos explicaciones. O bien estos sedicentes economistas del bienestar no son conscientes de la inadmisibilidad de su planteamiento, en cuyo caso carecen del indispensable poder de razonar; o bien han elegido este modo de argumentar intencionadamente para resguardar sus errores tras un término que de antemano se propone desarmar a los oponentes.

No es necesario añadir aquí nada a lo ya dicho en capítulos anteriores sobre las consecuencias de todo intervencionismo económico. Los interminables escritos en defensa de la llamada economía del bienestar no han ofrecido ningún sólido argumento que sea capaz de hacer variar nuestras conclusiones. Conviene, sin embargo, dedicar cierta atención a los argumentos que los defensores del bienestar esgrimen contra la economía de mercado.

II LA POBREZA

Supongamos una economía agrícola en la que cada familia poseería un terreno suficiente para atender las propias necesidades; agreguemos al modelo un cierto número de artesanos, tales como herreros, y de profesionales, como médicos; supongamos además la existencia de trabajadores por cuenta ajena, que cultivan las tierras de los propietarios y reciben el correspondiente estipendio y asistencia en caso de vejez o enfermedad.

Muchas son las utopías que se han basado en esta construcción imaginaria, la cual, indudablemente, con mayor o menor pureza, llegó a darse en determinadas épocas. Un ejemplo histórico, bastante aproximado al ideal, nos lo brindan las comunidades que los padres jesuitas crearon en lo que hoy es el Paraguay. No vale la

pena efectuar aquí un examen detallado de tales sistemas, pues la propia evolución histórica los desintegró. Serían un marco totalmente insuficiente para atender las necesidades de las grandes poblaciones actuales.

El defecto intrínseco de dichas organizaciones consiste en que el incremento demográfico condena a la gente a un progresivo empobrecimiento. Comienzan, en efecto, a aparecer los minifundios, insuficientes para atender las necesidades familiares, a medida que cada terrateniente va sucesivamente repartiendo las tierras entre sus herederos. Todo el mundo es propietario, pero extremadamente mísero. En China se constata la espantosa pobreza del cultivador de exiguu terruño. Si para evitar este desenlace se prohíbe la sucesiva parcelación, de inmediato aparecen enormes masas proletarias carentes de toda propiedad. Un abismo separa entonces a estos desheredados de las clases poseedoras. Se convierten en parias cuya mera existencia representa una grave amenaza de subversión social. Son gentes sin ocupación, a quienes la sociedad no puede dar trabajo. Están, pues, condenadas de antemano al hambre y a la miseria.

A estos desgraciados se referían, en épocas anteriores a la formación del capitalismo moderno, los gobernantes, filósofos y legisladores cuando se ocupaban de los pobres y de los problemas de la pobreza. El *laissez faire* y su secuela, la industrialización, transformaron a dichos miserables sin oficio en activos asalariados. En el mercado libre aparece gente con mayores o menores ingresos. Lo que no hay son individuos capaces y deseosos de trabajar que no tengan trabajo porque la sociedad no pueda proporcionárselo. Sin embargo, el liberalismo y el capitalismo, aun en sus momentos de máximo esplendor, no arraigaron sino en estrechas zonas geográficas: Europa central y occidental, América del Norte y Australia. En el resto del mundo, hoy como ayer, millones de seres vegetan al borde de la muerte por inanición. Son pobres, verdaderos indigentes, en el primitivo sentido de la palabra; seres supernumerarios, incapaces de mantenerse a sí mismos y latente amenaza para la minoría de superior fortuna.

El capitalismo no es responsable de la miseria de estas desgraciadas masas —fundamentalmente de color—, sino que, al contrario, es la ausencia del orden capitalista la que ocasiona tan tris-

tes situaciones. Las propias poblaciones europeas vivirían hoy peor aún que los *coolies* asiáticos a no ser por el triunfo en Occidente de la filosofía del *laissez faire*. Lo malo de Asia es que, en comparación con Europa, hay allí muy poco capital por individuo. La ideología oriental y los sistemas económicos imperantes vedan la aparición de empresarios deseosos de conseguir beneficios. La acumulación de capital indígena es prácticamente nula y prevalece por doquier una xenofobia tal que hace prohibitiva la aportación de capitales extranjeros. La población, en muchos de esos países, aumenta más de prisa que el capital.

No se puede achacar a las potencias occidentales la pobreza de los países coloniales. Los europeos invirtieron enormes sumas e hicieron, sin que se lo propusieran directamente, todo cuanto estaba en su mano por elevar el nivel de vida de aquellos pueblos. No es culpa de los blancos si los orientales rechazan, como ideología foránea, el capitalismo y prefieren seguir apegados a sus mitos tradicionales.

La pobreza que se produce bajo los sistemas no capitalistas desaparece en cuanto se instaura un régimen de mercado libre. El aumento de población, entonces, lejos de provocar la aparición de más y más hambrientos, supone disponer de más seres humanos cuyo empleo genera mayor riqueza. Quien pueda y quiera trabajar nunca será un paria. Los conflictos de Occidente entre «el capital» y «el trabajo», a los ojos de las masas de los países económicamente atrasados, no son sino luchas internas dentro de una misma casta de privilegiados. Para el proletariado asiático, el trabajador americano de la industria del automóvil es un «aristócrata». Pertenece, en efecto, a ese dos por ciento de la población terrestre que goza de mayores ingresos. No sólo las razas de color, sino también los pueblos árabes, eslavos y otros, estiman que su propia indignidad es consecuencia del alto nivel de vida de los países capitalistas, del bienestar que un doce o un quince por ciento de la población humana disfruta. La prosperidad de estos supuestos privilegiados, dejando aparte el problema de las barreras migratorias, en modo alguno viene financiada por la pobreza de aquéllos, quienes, sin embargo, se niegan a aceptar que la única causa de esos males que tanto lamentan radica en su rechazo del sistema capitalista.

Bajo la égida del mercado libre e inadulterado, el problema de la pobreza surge sólo en relación con quienes, por razones fisiológicas, no pueden ganarse la vida. Siempre ha de haber, aparte de la población infantil, personas incapaces de proveer a sus propias necesidades. El capitalismo mejora el nivel de vida de las masas; proporciona mayor salud, combatiendo la enfermedad con métodos cada vez más perfectos, pero no puede evitar que haya gente incapacitada para el trabajo. Ciertamente es que hoy en día personas que en otro tiempo habrían sido inválidas por el resto de su vida logran recobrar sus facultades y siguen llevando una vida activa; pero no menos cierto es que muchos que antes habrían desaparecido a causa de enfermedades, malformaciones y accidentes, actualmente sobreviven como inválidos permanentes. Es más: la prolongación de la vida media da lugar a que vaya en aumento el número de ancianos.

Estamos ante un problema típico de la sociedad humana. El animal enfermo o tullido pronto fenece, víctima del hambre o de otros más fuertes. Los salvajes fueron siempre inmisericordes con sus semejantes inválidos, a quienes aplicaban métodos semejantes a los del moderno nazismo. Aunque a primera vista resulte paradójico, la existencia en un país de un elevado porcentaje de inválidos e incapaces es prueba evidente de civilización y de alto nivel de vida.

Se ha considerado siempre obra típicamente caritativa el cuidado de enfermos e impedidos carentes de familiares que les atiendan. Los fondos necesarios pueden provenir del erario, aun cuando lo más frecuente es que hayan sido aportados por organizaciones privadas. Las congregaciones y órdenes monásticas católicas y también algunas instituciones protestantes han realizado en esta materia maravillas, reuniendo sumas importantes que luego han sabido emplear rectamente. Existen hoy también organizaciones seculares que en noble emulación compiten con las citadas asociaciones.

Al sistema de caridad se le achacan dos defectos. Uno es la escasez de medios disponibles. Sin embargo, la verdad es que cuanto más progresa el capitalismo, con el consiguiente incremento general de la riqueza, mayores son los fondos caritativos. La gente, por un lado, da más cuanto mejor cubiertas tiene sus propias necesida-

des; por otro, al aumentar la riqueza, se reduce concomitantemente el número de los necesitados. Los ingresos del hombre medio, bajo un régimen de mercado, le permiten prevenir mediante el ahorro o los seguros la vejez, la enfermedad, los accidentes, la educación de la descendencia, así como la viudedad u orfandad de sus seres queridos. Hay razones fundadas para pensar que los haberes de los establecimientos caritativos resultarían, en los países capitalistas, suficientes para atender los objetivos deseados, si el intervencionismo no saboteara las instituciones básicas de la economía. El «hombre medio» no puede hoy ahorrar y asegurar su futuro porque se lo impiden los manejos monetarios de la expansión crediticia y la inflacionaria creación de medios de pago. No menor es el daño que otras medidas intervencionistas irrogan a los empleados y trabajadores, a los profesionales y a los pequeños empresarios. La mayoría de los que actualmente han de acogerse a la caridad pública se encuentran en tan triste situación a causa precisamente del dirigismo imperante. La inflación y el afán por reducir las tasas del interés socavan, además, los capitales puestos a disposición de asilos, hospitales, guarderías, orfanatos e institutos similares. Cuando el actual paternalismo lamenta la cortedad de los fondos caritativos disponibles no hace sino deplorar las consecuencias de la política que recomienda.

El segundo defecto del sistema caritativo, para sus críticos, consiste en que se basa en puros sentimientos de caridad y compasión. El indigente, bajo tal régimen, carece de título legal de aquello que percibe. Subsiste a costa de personas de buen corazón, sensibles a las penurias ajenas. Lo que el pobre obtiene no es sino un regalo que debe agradecer. Se trataría de una condición vergonzosa y humillante, insoportable para quien sienta el más mínimo respeto por sí mismo.

Son quejas justificadas. La caridad adolece siempre del mismo defecto. Corrompe tanto al que da como al que recibe. Aquél se vanagloria, mientras éste se debilita y rebaja. Ahora bien, si somos hoy conscientes de la indignidad de la limosna es por influencia de la propia filosofía capitalista. Todas las relaciones humanas, fuera del mundo del intercambio mercantil y monetario, se hallan informadas por ese espíritu de dependencia típico de la caridad. Pero es precisamente la ausencia de cordialidad y espiritualidad en el

mercado lo que más indigna a los enemigos del capitalismo, al que acusan de insensibilidad e indiferencia. La cooperación social bajo el mero signo del *do ut des*, aseguran tales opositores, deshumaniza a los individuos. Priva entonces, dicen, sobre el amor fraterno y el deseo de ayudar al prójimo la letra fría de los contratos mercantiles. Por nuestra parte, limitémonos a señalar que quienes acusan al capitalismo de desprestigiar los «aspectos humanos» caen en abierta contradicción con su propio pensamiento cuando repudian la caridad privada precisamente porque se basa en sentimientos de conmiseración humana.

La sociedad feudal se asentaba en meros actos de gracia, por un lado, y de gratitud y de sumisión, por otro. El poderoso señor otorgaba beneficios a sus vasallos, quienes quedaban obligados a prestarle fidelidad personal. Tales relaciones eran «humanas» en cuanto el inferior besaba las manos del superior y le quedaba enteramente sometido. El carácter gracioso del acto caritativo a nadie molestaba en la sociedad feudal. La filosofía y los usos imperantes justificaban tales situaciones. Sólo más tarde, al surgir una organización social basada en vínculos contractuales, empieza a pensarse en conceder al menesteroso acción legal para exigir asistencia de la sociedad.

Tales reclamaciones al cuerpo social pretenden basarse en el llamado derecho natural. Todos los hombres, se afirma, somos iguales ante Dios, con un derecho inalienable a la vida. Sin embargo, la referencia a la igualdad innata carece de fundamento al tratar de los efectos de la innata desigualdad. Es ciertamente triste que haya hermanos nuestros incapaces de cooperar en la vida social por inmodificables circunstancias físicas. Las inexorables leyes naturales son las únicas responsables. Estos pobres desvalidos, habríamos de concluir, más que hijos, son hijastros de Dios o de la Naturaleza. Nada hay que oponer a las normas de la ética y de la religión que nos exhortan a asistir a nuestros semejantes desamparados. Pero estas normas nunca nos dicen cuál es la fórmula, el sistema, que permite atender mejor a esos desventurados. Sería contradictorio con el objetivo buscado el que, en el deseo de mejorar la suerte de los menesterosos, recurriéramos a sistemas que por fuerza han de poner en peligro la propia existencia social, reduciendo gravemente la productividad de la acti-

vidad humana. Nadie, ni útiles ni incapacitados, se beneficiaría bajo un orden que frenara la producción y redujera la cantidad de bienes disponibles.

Estos problemas no son de orden praxeológico, y la ciencia económica es incompetente para dar soluciones. Estamos en el terreno de la patología y de la psicología. El temor a la pobreza y la aversión a vivir de la caridad ajena son sentimientos que influyen favorablemente sobre la fisiología del hombre; le impulsan a que se mantenga en forma, tanto física como espiritual; le incitan a evitar enfermedades y accidentes y a procurar recuperarse con la mayor celeridad posible de cualquier daño sufrido. Las experiencias recogidas de la seguridad social en general, y especialmente del sistema más antiguo y completo cual fue siempre el alemán, muestran los inconvenientes de adormecer o suprimir tales incentivos humanos¹. Ninguna comunidad civilizada ha permitido que sus seres incapacitados perecieran sin ayuda de ningún género. Pero, dejando esto aparte, lo cierto es que la sustitución de la caridad privada por servicios sociales reglamentariamente establecidos parece pugnar con la esencia de la naturaleza humana que conocemos. No son divagaciones metafísicas, sino consideraciones prácticas, las que desaconsejan conceder al individuo una acción legal para reclamar de la sociedad alimento y subsistencia.

Por lo demás, es pura ilusión suponer que semejante régimen impuesto coactivamente evitaría a los indigentes la humillación aneja a todo sistema caritativo. Cuanta mayor amplitud se diera a las leyes, más casuística habría de ser su aplicación. No se haría, en definitiva, sino reemplazar el juicio del individuo que auxilia a su semejante, al dictado de la propia conciencia, por el juicio del funcionario público. Es difícil creer que este cambio mejoraría la suerte del menesteroso.

¹ V. Sulzbach, *German Experience with Social Insurance*, Nueva York 1947, pp. 22-32.

III LA DESIGUALDAD

La desigualdad de renta y riqueza es un rasgo característico de la economía de mercado. Su supresión implicaría la quiebra del sistema².

Quienes postulan la igualación de la riqueza, en verdad no aspiran sino a aumentar su personal capacidad adquisitiva. Nadie pretende distribuir las rentas propias. El obrero americano, cuando reclama mayor igualdad, lo único que desea es suprimir los dividendos, para así incrementar sus propios ingresos. Rechazaría indignado cualquier reducción del alto salario que cobra en beneficio de ese noventa y cinco por ciento de la población terrestre que gana mucho menos que él.

La función de la desigualdad de rentas en una sociedad de mercado es totalmente diferente de la que desempeña en una organización de tipo feudal o en cualquier otro sistema no capitalista³. Sin embargo, esta desigualdad precapitalista tuvo una gran importancia histórica.

Contrastemos, por ejemplo, el caso de China y el de Gran Bretaña. El imperio amarillo, como es sabido, desarrolló en su día una elevada civilización. Hace dos mil años estaba muy por delante de Inglaterra. Sin embargo, a finales del siglo pasado, ésta era una nación rica y civilizada, mientras aquél languidecía en la pobreza. La civilización china había quedado, siglos atrás, congelada, sin posibilidad de progreso.

El celeste imperio practicó el principio igualitario con mucho mayor ahínco que Gran Bretaña. Los terrenos de cultivo se dividían y subdividían incesantemente. Es cierto que en China prácticamente no existía una clase proletaria carente de tierras, mientras que en la Inglaterra del siglo XVIII esta clase social era numerosa. Las prácticas restrictivas británicas, inspiradas en la ideología tradicional, habían hecho imposible durante siglos la aparición del empresario eficiente. Pero la industrialización del país, gracias a la existencia de aquella fuerza laboral, pudo progresar a pasos de

² V. pp. 349-351 y 872-873.

³ V. pp. 378-379.

gigante tan pronto como la filosofía del *laissez faire* logró abrir las puertas al capitalismo, poniendo de manifiesto los errores del restriccionismo mercantilista.

La «era de las máquinas», contrariamente a lo que Sombart afirma, no surgió porque de pronto se apoderara de ciertos espíritus una determinada mentalidad adquisitiva, provocando la aparición del «hombre capitalista». Siempre ha habido personas deseosas de obtener beneficios a base de acomodar la producción a los deseos y apetencias de los consumidores. Pero en la era precapitalista estos promotores estaban atados de pies y manos a causa de las ideologías imperantes contrarias al afán de lucro y respaldadas por las oportunas reglamentaciones públicas. La superación de las filosofías tradicionales por el espíritu del *laissez faire* hizo caer las antiguas barreras y prohibiciones, que impedían a la gente alcanzar el bienestar y el progreso, instaurándose así la nueva era del maquinismo.

Los liberales combatían las castas y estamentos del *ancien régime* porque hacían imposible el recto funcionamiento del mercado. Abogaban por la abolición de los viejos privilegios, en el deseo de que nada ni nadie impidiera a los más capaces producir la mayor cantidad posible de bienes, de la mejor calidad y del modo más económico. Utilitaristas y economistas, en este aspecto, coincidían con otros que también combatían las clases consagradas; pero, a diferencia de estos últimos, nunca basaron su razonamiento en el derecho natural o en la innata igualdad humana. Ambos grupos clamaban por la igualdad de todos ante la ley; pero la oposición básica entre ellos no desapareció nunca.

La escuela del derecho natural afirma que los hombres, biológicamente, son todos iguales, teniendo en consecuencia cada uno un derecho inalienable a su cuota parte de los bienes disponibles. La primera afirmación se halla desmentida por la realidad misma; la segunda, llevada a las últimas consecuencias, conduce a tales absurdos que sus defensores acaban dejando de lado toda coherencia lógica y terminan considerando cualquier institución, por discriminatoria e inicua que sea, perfectamente compatible con la inalienable y soberana igualdad humana. Los distinguidos caballeros virginianos cuyas ideas tanto impulsaron la revolución americana jamás expresaron oposición alguna a la esclavitud del

hombre de color. El más despótico sistema de gobierno conocido por la humanidad, el bolchevismo, se nos presenta como la propia encarnación de la libertad y de la igualdad.

Los defensores liberales del principio de la igualdad ante la ley subrayaban la innata desigualdad del hombre; comprendían que esta desigualdad era precisamente la causa y origen de la cooperación social y de la civilización. La igualdad ante la ley, según ellos, no modificaría ninguna de las inexorables realidades del mundo en que vivimos y, desde luego, no vendría a suprimir la natural desigualdad humana. Ahora bien, de este hecho inmodificable los liberales se proponían sacar el máximo provecho para todos. Ninguna institución de origen humano, pensaban, impediría a nadie en lo sucesivo alcanzar aquella posición desde la cual pudiera servir mejor a sus semejantes. Contemplaban el problema de la desigualdad bajo el prisma exclusivo de lo social y utilitario, dejando de lado supuestos derechos humanos inalienables. Sostenían la igualdad ante la ley porque beneficia a todos. Sobre esta base, los electores designarían a los gobernantes, mientras los consumidores dirigirían las actividades productivas. De este modo se eliminarían las causas mismas de guerras y conflictos y quedaría implantado un orden social en constante progreso.

El triunfo de esta filosofía liberal produjo esa serie de fenómenos que denominamos civilización occidental. Sin embargo, esta nueva ideología sólo pudo imponerse allí donde el ideal de la igualdad de rentas era muy débil. Nunca habría atraído el *laissez faire* al inglés del siglo XVIII si éste hubiera estado obsesionado por la quimera de la igualdad de rentas y patrimonios, por la misma razón que nada dice hoy a chinos y musulmanes. En este sentido, el historiador debe reconocer que la herencia ideológica del feudalismo y el sistema señorial contribuyeron al nacimiento de la civilización moderna, tan diferente de ellos.

Aquellos filósofos del XVIII que no lograron comprender los principios de la nueva teoría utilitaria seguirían perorando acerca de la superioridad social de chinos y mahometanos. Poco sabían ciertamente de las condiciones reales en tales naciones. Pero la vaga información que poseían les dejaba vislumbrar la ausencia en dichos países de una clase aristocrática de tipo hereditario basada en latifundios agrarios, lo cual les resultaba sobremedida atractivo.

En su opinión, esos pueblos habían conseguido implantar los principios igualitarios con más éxito que el Occidente europeo.

Los intelectuales nacionalistas del XIX dieron nuevo impulso al ideario. Los teóricos del paneslavismo se lanzaron en cabeza a exaltar la propiedad agraria comunal, según se manifestaba en el *mir* o el *artel* ruso o en la *zadruga* yugoslava. Hoy en día, tras esa revolución semántica que ha transformado el significado de los antiguos vocablos políticos en lo contrario de lo que antes querían decir, todo el mundo presume de «democrático». Alardean de democratismo los musulmanes, que nunca conocieron otro sistema político que el puramente autocrático. ¡Y los nacionalistas indios llegan a vanagloriarse de la «tradición democrática» hindú!

Tales efusiones sentimentales no deben impresionar a los economistas e historiadores. Cuando calificamos de atrasados a los pueblos asiáticos, no efectuamos un juicio de valor. Simplemente afirmamos que esos pueblos no supieron producir aquella base ideológica e institucional que dio origen a la civilización capitalista occidental cuya superioridad tácitamente reconocen los orientales actuales al reclamar sus frutos, al menos los técnicos y terapéuticos. Admitimos que la cultura de ciertos pueblos asiáticos fue en determinadas épocas muy superior a la de sus coetáneos europeos; y por eso precisamente creemos interesante investigar las causas que un día paralizaran allí el progreso. La respuesta es obvia en el caso hindú. El férreo dogal del sistema de castas vedaba al individuo toda libertad de acción, haciendo prohibitivo cualquier intento de abandonar los cauces tradicionales. China y los países musulmanes, en cambio, dejando aparte una pequeña minoría de esclavos, nunca admitieron el régimen de castas. Se gobernaban, ciertamente, por administraciones autocráticas; pero los súbditos eran todos iguales ante el jerarca. Incluso los esclavos y eunucos podían alcanzar las máximas dignidades. Quienes hoy nos hablan del democratismo de los pueblos orientales precisamente destacan esa universal igualdad ante el gobernante.

Las ideas de igualdad económica que dichos pueblos y sus políticos pretendían llevar a la práctica eran vagas e inconcretas en general. Pero eran claras y tajantes en un aspecto: en el de condenar sin paliativos la acumulación de riqueza en manos del particular. Todos, tanto gobernantes como gobernados, pensaban que

amasar una fortuna suponía haber expoliado previamente a otros de lo que en justicia les correspondía; la riqueza de unos pocos era la causa de la pobreza de los más. La posición del rico comerciante oriental era siempre precaria en extremo. Estaba invariablemente a merced del más mínimo funcionario. Ni dádivas ni presentes podían evitar expoliaciones repetidas. Regocijábanse las masas cuando veían caer al ayer poderoso mercader víctima del odio y la envidia del gobernante.

Este espíritu anticrematístico impedía todo progreso y condenaba a las poblaciones a vivir bordeando siempre la muerte por inanición. La implantación de adelantos técnicos era imposible al resultar impracticable cualquier acumulación seria de capital. El liberalismo capitalista llegó a Oriente desde Occidente al amparo de fuerzas armadas que imponían regímenes coloniales o enclaves extraterritoriales. Los violentos métodos aplicados por los occidentales no eran, desde luego, los mejores para inducir a los pueblos sometidos a modificar su mentalidad tradicional. Pero esto no debe hacernos olvidar que si centenares de millones de asiáticos estaban condenados al hambre y la miseria, ello se debía a la general oposición contra cualquiera que pretendiese reunir capitales importantes.

La igualdad que la mentalidad paternalista de Occidente predica actualmente es la réplica exacta de la filosofía oriental. Pensamiento vago y confuso, sólo se hace claro y preciso cuando se trata de abominar de toda fortuna señalada, de toda empresa poderosa, de toda acumulación privada de riqueza. Sus defensores recurren gustosos a cualquier medida que debilite y perturbe el mundo de los negocios; pretenden imponer la igualdad a base de cargas fiscales expoliatorias; apelan invariablemente a la envidia de las masas.

Ya hemos visto las consecuencias económicas inmediatas de esta política confiscatoria⁴. A la larga reducirán la tasa de crecimiento del capital, si no llegan a impedir su gestación e incluso a provocar la desaparición del existente. Se irá paralizando el desarrollo económico y quedarán abiertas las puertas a una progresiva pauperación de la gente. Ello supondrá, en definitiva, el triunfo de

⁴ V. pp. 947-953.

los ideales asiáticos; Oriente y Occidente podrán entonces estrecharse las manos sumidos en idéntica miseria.

El paternalismo dirigista de hoy pretende erigirse en defensor de los verdaderos intereses de la sociedad frente al comportamiento egoísta del empresario ávido de ganancias. Asegura que se preocupa de los intereses seculares del país frente a especuladores, promotores y capitalistas, olvidados del futuro de la sociedad en su conjunto e interesados tan sólo por el beneficio inmediato. Esta segunda afirmación resulta ciertamente incompatible con la inquietud que algunos de sus patrocinadores manifiestan por el bienestar del momento basándose en aquello de que «a la larga, todos muertos». Desde luego, la coherencia lógica no parece ser virtud que caracterice a los doctrinarios del bienestar. Pasemos por alto, a efectos dialécticos, esta incoherencia y examinemos el fondo de sus argumentos, dejando de lado el aspecto contradictorio de los mismos.

El ahorro, la acumulación de capital y la inversión significan suponen detraer del consumo actual una parte de los bienes disponibles, con miras a mejorar futuras situaciones. El ahorrador reduce su satisfacción presente en el deseo de aumentar su propio bienestar y el de su familia en el futuro. Este comportamiento viene ciertamente dictado por motivaciones egoístas, empleando este adjetivo en su sentido más popular. Lo interesante es que ese egoísmo beneficia a todos los componentes de la sociedad y contribuye decisivamente al futuro bienestar de la misma; genera lo que hasta el dirigista más recalcitrante no tiene otro remedio que calificar de *desarrollo económico y progreso*.

Las medidas recomendadas por el *welfarismo* o escuela del bienestar eliminan el incentivo a ahorrar por parte de los ciudadanos particulares. Por un lado, las cargas fiscales con que se gravan las rentas y patrimonios de mayor importancia destruyen, o al menos restringen seriamente, el ahorro de los ricos. Por otra parte, los ahorros de los de menores medios son manejados de tal modo que acaban siendo destinados al consumo. Cuando antiguamente un individuo ahorra mediante un depósito bancario o una póliza de seguros, el banco o la empresa aseguradora invertía sus fondos en negocios productivos. Aun en el caso de que el interesado destinara posteriormente la cantidad a gastos de consumo, en el conjunto

no había ni desinversión ni reducción del capital disponible; pese a tales eventuales retiradas de fondos, en efecto, los saldos deudores y, consecuentemente, las inversiones de las instituciones de crédito y de las compañías de seguros aumentaban de continuo.

Hoy prevalece la tendencia a presionar sobre los bancos y las compañías de seguros para que inviertan cada vez más en deuda pública. Es más: las cajas administradoras de los seguros sociales tienen que colocar la totalidad de sus cuantiosas percepciones en valores estatales o paraestatales. Por lo que se refiere a la acumulación de capital, este ahorro individual queda privado de toda virtualidad en la misma medida en que la administración gasta en bienes de consumo o torpes inversiones lo que por sus emisiones de deuda recibe. El ahorro, la creación de capital y la inversión, en un mercado libre, son sumas idénticas y correlativas; por el contrario, bajo una economía intervenida, el gobierno puede dilapidar libremente el ahorro efectivo de los gobernados. El particular se sacrifica y reduce el consumo propio en el deseo de proveer a su futuro; de este modo, aun sin quererlo, contribuye al progreso económico de la nación y a la elevación del nivel de vida de sus conciudadanos. Pero interviene el gobierno y desbarata tan beneficiosos efectos. Nada desmiente mejor que este ejemplo el cliché del welfarismo que contrapone el individuo egoísta y de estrechas miras, interesado sólo por las satisfacciones del momento, siempre olvidado del bienestar de los demás y de la sociedad en su conjunto, y el gobernante benevolente y previsor, siempre entregado a promocionar la felicidad presente y futura de toda la sociedad.

El propagandista del bienestar suele oponer dos objeciones al anterior planteamiento. En primer lugar, destaca que la motivación del particular es puramente egoísta, mientras que la administración pública actúa impulsada sólo por consideraciones desinteresadas. Admitamos, a efectos dialécticos, que los individuos son efectivamente diabólicos y los gobernantes angélicos. Pero lo que en la vida real cuenta —diga Kant lo que quiera— son los hechos, no las buenas intenciones. Lo que hace posible que la sociedad exista y evolucione es precisamente el hecho de que la pacífica cooperación social bajo el signo de la división del trabajo permite a la larga dar la satisfacción más cumplida posible a las egoístas aspiraciones de la gente. La mayor gloria del mercado consiste precisa-

mente en que su funcionamiento está orientado a la realización de este principio.

La segunda objeción consiste en decir que la inversión pública puede perfectamente suplir la inversión privada. Se resalta el hecho de que los gobernantes no gastan en bienes de consumo todo lo que perciben; una parte no despreciable es invertida en carreteras y caminos, ferrocarriles, puertos y aeródromos, centrales eléctricas y demás servicios públicos; otra parte importante se destina a aprovisionar las fuerzas armadas, defensoras de la comunidad, cuyos gastos, muchas veces, sobre todo en caso de conflicto bélico, resulta difícil financiar de otra manera. Pero no es esto lo que se discute. Lo que decimos es que el gobierno gasta y consume una parte del ahorro de los particulares, y que nada impide al gobierno incrementar esta parte hasta llegar a absorber la totalidad.

Si el gobierno impide al sector privado ahorrar, habrá él de ahorrar e invertir para mantener capitalizado al país. El dirigista, que ve en el estado la personificación de la divinidad, no puede ni percatarse de los gravísimos problemas involucrados, convencido como está de que el supremo jerarca, providencialmente, con mano sabia, sabrá ir paulatinamente llevando la sociedad hacia situaciones cada vez mejores, de acuerdo con el progreso natural del género humano.

Es preciso restringir el consumo actual, siempre con miras a abastecer mejor el futuro, no ya sólo para acumular nuevos capitales, sino para conservar simplemente el existente. El ahorro supone siempre un acto de privación, de abstinencia; un dejar de lado satisfacciones que en otro caso se podrían haber disfrutado⁵. Las circunstancias del mercado inducen a practicar tal abstención de consumir e ilustran después al ahorrador acerca de cómo invertir para dejar atendidas, en la mayor medida posible, las más urgentes

⁵ Esto no significa coincidir con las teorías que justificaban el fenómeno del interés como un «premio» al sacrificio del ahorrador. En nuestro mundo no existe ningún ente mítico que premie o que castigue. Ya antes, en el capítulo XIX, analizamos qué es y qué representa el interés. Ahora bien, frente a las ironías tan poco oportunas de un Lassalle (*Herr Bastiat-Schulze von Delitzsch in Gesammelte Reden und Schriften*, ed. Bernstein, V, 167), ampliamente difundidas por muchos libros de texto, bueno es reiterar que el ahorro es siempre privación (*Entbehrung*), por cuanto supone dejar de disfrutar hoy de algo.

necesidades de los consumidores. Así las cosas, debemos preguntarnos si el ahorro estatal puede sustituir al privado y si puede el gobierno llegar a saber cómo invertir aquél. No afectan estas incógnitas exclusivamente al estado socialista. No son menos urgentes en un modelo intervencionista que ha eliminado total o casi totalmente las condiciones para la formación de capital privado. Incluso los Estados Unidos se van acercando cada vez más a esta situación.

Supongamos que determinado gobierno ha conseguido controlar una porción importante del ahorro privado. Las autoridades regulan en gran medida las inversiones de la seguridad social, de las compañías de seguros, de las instituciones de ahorro y de los bancos comerciales y, como es natural, presionan para que aquéllas se orienten hacia los valores mobiliarios públicos. Los particulares, desde luego, siguen ahorrando. Ahora bien, el que tal ahorro produzca nuevos capitales y, por ende, se amplíe la suma de bienes de capital disponible depende del empleo que el gobierno dé a los fondos que percibe. Si la administración dilapida tales sumas, bien gastándoselas en mero consumo o bien invirtiéndolas desafortunadamente, queda enervado el proceso de acumulación de capital iniciado por el ahorro y la inversión del sector privado. Un ejemplo arrojará luz sobre el tema.

Supongamos un régimen de mercado inadulterado. Juan, en tales circunstancias, ahorra cien dólares, que coloca en un banco de depósito. Si el interesado ha sabido elegir un buen banquero que acertadamente invierta la suma en cuestión, se produce nuevo capital que a su vez incrementa la productividad marginal del trabajo. Una parte de la consiguiente mayor producción revierte al depositante en forma de interés. Por el contrario, si Juan yerra y encomienda su dinero a un banco que suspende pagos, entonces lo pierde todo.

Contemplemos ahora el caso de Pablo, quien, bajo un sistema intervencionista, ahorró en 1940 cien dólares pagando su seguro a las instituciones de la seguridad social nacional⁶. El gobierno, por tal abono, reconoció a Pablo derecho a percibir en su día cierta suma.

⁶ Es indiferente, a estos efectos, que la entrega la efectúe el propio Pablo o su patrono por mandato legal. V. p. 712.

Ahora bien, si el gobierno consumió los citados cien dólares no se produce incremento alguno de capital y no aumenta la productividad laboral. La deuda contraída con Pablo por la administración se transforma en un crédito de éste contra los contribuyentes de mañana. Ciertamente Pedro tendrá en 1970 que atender el compromiso contraído en 1940 por la caja aseguradora, aunque él personalmente no haya obtenido ninguna ventaja del sacrificio de Pablo.

Resulta, pues, evidente que no hay que fijar nuestra atención en la Unión Soviética para comprender las consecuencias sociales de los modernos métodos de financiación del gasto público. Salta a la vista el carácter engañoso de aquel manido argumento según el cual la deuda pública no es en verdad una carga, ya que «sólo a nosotros mismos la debemos». Los Pablos de 1940 no se la deben a sí mismos. Son los Pedros de 1970 los que la deberán a los Pablos de 1940. La filosofía de «después de mí, el diluvio» es la que por todos sus poros rezuma la doctrina. Los políticos de 1940 resolvieron sus dificultades trasladándolas a los gobernantes de 1970. Cuando esta fecha llegue, aquéllos o habrán muerto o estarán escribiendo sus memorias acerca de la gran obra de seguridad social que realizaron.

Los cuentos de hadas a que tan aficionados son nuestros paternalistas contemporáneos reflejan bien la incapacidad de éstos para comprender los problemas que la teoría del capital plantea. Por ello mismo son indignos de utilizar el vocablo «paternal» con el que quisieran definirse. Quien desconoce alegremente la indudable escasez de los bienes de capital no merece llamarse economista, sino fabulador. Prefiere vivir de espaldas a la evidente realidad, en una fabulosa Jauja, donde todo abundaría. Los encantadores sueños de nuestros dirigistas, al igual que los del socialismo, presumen tácitamente inacabables disponibilidades de bienes de capital. Entonces es fácil solucionar todos los problemas humanos; dar a cada uno «de acuerdo con sus necesidades» y hacer al mundo entero perfectamente feliz.

Es cierto que algunos de los enemigos de la economía de mercado perciben vagamente el meollo del problema. Advierten que el capital existente debe conservarse si no se quiere reducir la productividad del trabajo⁷. Pero incluso tales autores desconocen que el mero

⁷ Nos referimos fundamentalmente al profesor A.C. Pigou, a su libro *The Economics of Welfare* [tr. esp., Aguilar, Madrid 1946] y a diversos artículos suyos. Para una

mantenimiento del capital hoy disponible depende de acertadas y nuevas inversiones, es decir, de afortunadas especulaciones, y que resulta ineludible para mantener intacto el capital recibido poder recurrir al cálculo económico, que a su vez presupone la existencia de un mercado libre. Los demás dirigistas ignoran por completo el problema. Igual da, a estos efectos, que pretendan apoyarse en los esquemas marxistas o que más bien prefieran airear nuevas quimeras, como por ejemplo la supuesta capacidad de «auto-perpetuación» de las cosas útiles⁸. Sus escritos, por desgracia, sirven para propagar aquella doctrina según la cual todos los males provienen del excesivo ahorro y de la insuficiente capacidad de consumo, por lo que el gastar sin tasa constituiría la panacea universal.

Cercados por la implacable lógica de los economistas, otros socialistas e intervencionistas acaban por reconocer que sólo el mantenimiento del actual capital puede evitar el descenso del nivel de vida y que si en el futuro ha de haber progreso económico es imprescindible acumular nuevos capitales. Pero dicen que de la conservación del presente capital y de la acumulación del suplementario se encargará el gobierno. Tareas tan importantes, dicen, no pueden quedar en manos del egoísta particular interesado sólo en su propio enriquecimiento y el de su familia; las autoridades se ocuparán de estos asuntos y los abordarán con la vista puesta en el bien común.

El quid de la cuestión radica precisamente en la función de ese egoísmo. Bajo un sistema de desigualdad, este egoísmo impulsa al hombre a ahorrar y a invertir sus ahorros de manera que sean satisfechas lo mejor posible las necesidades de los consumidores. Bajo un sistema igualitario, por el contrario, ese incentivo se esfuma. La reducción del consumo en el inmediato futuro es una privación perceptible, un golpe para las egoístas apetencias del individuo. El incremento de la oferta disponible en un futuro más lejano que se espera de la privación inmediata es apenas perceptible por el hombre común. Esta común reacción se agiganta bajo un régi-

crítica de las ideas de Pigou, v. Hayek, *Profits, Interest and Investment*, Londres 1939, pp. 83-134.

⁸ V. F.H. Knight, «Professor Mises and the Theory of Capital», *Economica*, VIII (1941), 409-427.

men de ahorro estatal, pues el ahorrador ve lo poco que en la común distribución le tocará en el futuro por su personal y actual sacrificio. Los partidarios de la doctrina del bienestar suponen frívolamente que la gente ahorrará más al comprender que los frutos de sus privaciones ahorrativas se repartirán mañana entre toda la siguiente generación. Son víctimas de la célebre ilusión platónica. Como es sabido, el filósofo griego sostenía que si se impide a los hombres conocer quiénes son sus verdaderos hijos, cuidarán como tales a todos los niños. Más les hubiera valido a nuestros ideólogos recordar a Aristóteles cuando advertía que la reacción natural en tal caso es que todos los padres sean igualmente indiferentes frente a todos los niños⁹.

El problema relativo al mantenimiento e incremento del capital es insoluble para un sistema socialista que no puede recurrir al cálculo económico. En efecto, la sociedad socialista carece de medios adecuados para averiguar si su capital aumenta o disminuye. La situación, sin embargo, no llega a ser tan grave para aquellos regímenes socialistas o intervencionistas que, por poder utilizar los precios de los mercados del mundo libre, todavía pueden acudir al cálculo económico. Esta circunstancia les permite, hasta cierto punto, calibrar la marcha de los acontecimientos.

Los problemas atinentes a la conservación del capital existente y a la formación de capital adicional son en los países democráticos con economías dirigidas el principal motivo de antagonismo político. Nunca han de faltar demagogos que propugnen dedicar al consumo inmediato cantidades más elevadas que las propuestas por el partido que gobierna o por el resto de las organizaciones políticas. Hay siempre gentes propicias a proclamar que «en la actual emergencia» ni siquiera cabe pensar en acumular capital para el futuro y que, por el contrario, lo justo y procedente es consumir una parte del existente. Pugnan entre sí los distintos partidos políticos ofreciendo al elector, por un lado, aumentar el gasto público y, por otro, reducir las cargas fiscales, salvo aquellas que hayan de soportar exclusivamente los ciudadanos más pudientes. En la época del *laissez faire* la gente consideraba al gobierno como una

⁹ V. Aristóteles, *Política*, lib. II, cap. III, en *The Basic Works of Aristotle*, ed. R. McKeon, Nueva York 1945, pp. 1.148 ss [tr. esp., Gredos, Madrid 1988].

institución que exigía sacrificios de sus gobernados a través de la imposición fiscal. En el presupuesto particular de cada individuo las cargas estatales eran consideradas como un gasto más. Hoy en día, por el contrario, la mayoría ve en el estado una entidad dispensadora de mercedes. Asalariados y agricultores esperan recibir del erario público más de lo que piensan aportar. El estado se percibe como fuente de dádivas, no como colector de impuestos. Tan populares creencias fueron sistematizadas y elevadas al rango de doctrina cuasi-económica por Lord Keynes y sus discípulos. Sin embargo, los gastos públicos y el déficit presupuestario implican de modo inexorable un consumo de capital. Si los gastos corrientes, por más beneficiosos que se consideren, se financian detrayendo mediante el impuesto sobre sucesiones aquella parte de las rentas más elevadas que de otro modo se habría dedicado a la inversión, o bien a través de la deuda pública, entonces el gobierno se convierte en el gran consumidor de capital. El hecho de que en la América actual la acumulación anual del capital supere probablemente¹⁰ al consumo anual del mismo no invalida la afirmación de que el conjunto de las medidas financieras del gobierno federal, de los estados y de los municipios tiende al consumo de capital.

Muchos, conscientes de las nocivas consecuencias que entraña la dilapidación de capital, se apresuran a alegar que los regímenes basados en el sufragio popular jamás pueden aplicar correctas y sanas políticas económicas. Pero la verdad es que de esto no tiene la culpa la democracia; la responsabilidad incumbe a aquellos idearios que quisieran erigir, como símbolo del estado, en vez de la imagen del vigilante nocturno, que vanamente quiso Lassalle ridiculizar, un dadivoso y mítico Santa Claus. La opinión pública decide siempre la política económica a seguir. Ningún gobierno, ni demócrata ni dictatorial, puede a la larga eludir el imperativo de las ideologías dominantes.

Quienes propugnan una limitación de las prerrogativas parlamentarias en materias fiscales y presupuestarias, recomendando incluso la supresión del gobierno representativo y su sustitución por la dictadura, se hallan sometidos al hechizo del quimérico

¹⁰ Es inútil pretender dilucidar esta incógnita recurriendo a las estadísticas en una época como la nuestra con permanente inflación y expansión crediticia.

gobernante perfecto. Este ser bondadoso y sabio por excelencia procuraría, con absoluta y leal dedicación, el continuo bienestar de sus súbditos. Pero el gobernante real es un hombre mortal que ante todo aspira a perpetuar su posición y la de su clan, amigos y partido. Sólo con tal objetivo recurre a medidas impopulares. Ni invierte ni acumula capital; prefiere levantar fortalezas y equipar ejércitos.

Los tan admirados planes de los autócratas nazis y soviéticos consistían en reducir el consumo de la población para «invertir» más. Los nazis nunca ocultaron que tales «inversiones» tenían por objeto construir el oportuno aparato bélico para preparar mejor la agresión. La Rusia soviética fue menos sincera inicialmente. Pero luego proclamó orgullosamente que la preparación militar constituía el verdadero objetivo de todos sus planes. La historia no registra ninguna acumulación de capital por el estado. El capital invertido por la administración en carreteras, ferrocarriles y obras de utilidad general fue siempre obtenido de los particulares a través de impuestos o mediante empréstitos. La mayor parte de la deuda pública se dedicó invariablemente a gastos de consumo. El particular economiza, pero llega el estado y alegremente dilapida lo tan penosamente acumulado.

Ni siquiera quienes con mayor apasionamiento combaten la desigualdad de rentas y patrimonios pueden desconocer que es una poderosa incitación a la creación de nuevo capital. Y sólo la acumulación de capital adicional provoca el progreso técnico, el incremento real de los salarios y la elevación del nivel de vida de las masas.

IV LA INSEGURIDAD

La vaga noción de seguridad en que piensa el welfarismo cuando lamenta la inseguridad se refiere a algo así como un derecho que la sociedad garantiza a todos los ciudadanos, con independencia de sus merecimientos, un nivel de vida que se considera satisfactorio.

Se disfrutó de tal seguridad social, afirman los apologistas de épocas pretéritas, durante la Edad Media. No vale la pena analizar

a fondo la cuestión. Los idealizados cuadros que la filosofía escolástica nos legó distan mucho de reflejar la auténtica realidad medieval; más que veraz descripción de las circunstancias del momento, son meros bosquejos de cómo sus autores habrían querido que fueran. Pero, aun en estos mundos utópicos de filósofos y teólogos, no faltaban numerosos mendigos, desprovistos de todo, mantenidos gracias sólo a la limosna de los por una u otra razón poderosos. Este tipo de seguridad en nada se parece a la que actualmente se reclama.

La seguridad que asalariados y modestos campesinos hoy postulan coincide con la estabilidad que muchos capitalistas también buscan¹¹. Del mismo modo que los capitalistas desean disfrutar permanentemente de una renta que no esté sujeta a los avatares de la condición humana, así también los asalariados y pequeños agricultores quisieran sustraer sus ingresos al impacto de los cambios producidos por el mercado. Unos y otros pretenden eludir el flujo histórico; detener el curso de los días. Ningún cambio debería en adelante perjudicar las posiciones ya conquistadas, bien entendido que nada objetarían a cualquier mejora en su situación personal. Aquella concreta estructura del mercado a la que en el pasado tuvieron que acomodar su actividad habría de mantenerse inalterable, evitando así a los interesados el tener que reajustar de nuevo su acción. El cultivador europeo de pobres terruños se irrita ante la competencia del agricultor canadiense que produce a costos más bajos. El pintor artesano se desespera cuando cualquier nuevo mecanismo altera sus condiciones de trabajo. Quienes así piensan lo que están pidiendo en verdad es un mundo congelado y muerto.

El mercado libre desconoce intereses creados. Nada cuentan las pasadas realizaciones si obstaculizan el progreso. Quienes reclaman seguridad y protección están en lo cierto cuando atribuyen al orden capitalista esa inestabilidad e incertidumbre que tanto les atemoriza. Pero se equivocan cuando piensan que son fruto del egoísmo de capitalistas y empresarios. No son éstos quienes dañan los intereses creados, sino los consumidores, empeñados siempre en dejar sus necesidades atendidas del modo más cumplido posible. La típica inseguridad del mercado no la crea la codicia de un

¹¹ V. pp. 272-275.

puñado de ricos, sino que proviene del humano afán por aprovechar cualquier circunstancia para mejorar. El deseo de la gente de disfrutar casas más alegres y baratas es la causa de aquello que indigna tanto al pintor. Pero es que éste mismo, por su parte, al adquirir los productos mejores y más económicos, contribuye a desestabilizar otros sectores del mercado laboral.

Es ciertamente penoso tener que estar siempre acomodándose a nuevas situaciones. Pero el cambio constituye la esencia misma de la vida. La típica incertidumbre del mercado, el no concederse protección a ninguna situación preestablecida, el desprecio por los intereses creados, todo ello, bajo un régimen de economía libre, impulsa la constante mejora del bienestar material de la gente. Es inútil entretenerse con las bucólicas ensoñaciones de un Virgilio o con los pastoriles cuadros de los poetas y pintores del XVIII. Poco sabemos acerca de la vida real de los antiguos pastores de ganados. Pero lo que resulta indudable es que no nos cambiaríamos por ellos.

Las calamidades de la crisis de 1929 dieron gran impulso a los patrocinadores de la seguridad social. Los millones de parados vieron en la misma la panacea de sus males. «He ahí lo que vuestro capitalismo provoca», gritaban los cabecillas de los grupos de presión sindicales y agrarios. Pero aquellas indudables penalidades no eran fruto del capitalismo, sino consecuencia de la reiterada pretensión de «reformular» y «mejorar» el funcionamiento del mercado. La catástrofe financiera fue efecto de la expansión crediticia y de la consiguiente reducción de los tipos de interés, y el paro institucional, la consecuencia de los salarios mínimos impuestos coactivamente.

V LA JUSTICIA SOCIAL

Al menos en un aspecto los actuales propagandistas del bienestar superan a los antiguos socialistas y reformadores sociales. No identifican ya la justicia social con arbitrarias normas que todos habrían de respetar por más desastrosas que fueran sus consecuencias. Admiten el principio utilitarista. Los diferentes sistemas

económicos, reconocen, deben ser enjuiciados según su respectiva idoneidad para alcanzar los objetivos que el hombre persigue.

Pero olvidan tan buenos propósitos en cuanto se enfrentan con el funcionamiento de la economía de mercado. Condenan la economía libre por no adaptarse a ciertas normas y códigos metafísicos que ellos mismos previamente han elaborado. Es decir, introducen así por la puerta trasera criterios absolutos a los que negarían acceso por la entrada principal. Buscando remedios contra la pobreza, la inseguridad y la desigualdad, poco a poco van cayendo en los errores de las primitivas escuelas socialistas e intervencionistas. Inmersos en un mar de absurdos y contradicciones, acaban invariablemente apelando a la infinita sabiduría del gobernante perfecto, a esa tabla de salvación a la que los reformadores de todos los tiempos siempre al final se vieron obligados a recurrir. Su última palabra es siempre estado, gobierno, sociedad o cualquier otro hábil sinónimo del superhombre dictador.

Los teóricos del bienestar, como los *Kathedersozialisten* alemanes y sus discípulos, los institucionalistas americanos, han publicado miles de volúmenes, detallados catálogos de las insatisfactorias condiciones en que se debate el género humano. De este modo creen demostrar las deficiencias del capitalismo. Pero en realidad tales escritos no nos dicen sino lo que todos ya sabemos: que las necesidades humanas son prácticamente ilimitadas y que hay todavía mucho que hacer en bien de la humanidad. Lo que tales publicaciones nunca se preocupan de demostrar es la idoneidad del intervencionismo y del socialismo para remediar los propios males que airean.

Nadie duda que, si hubiera mayor abundancia de bienes, todo el mundo estaría mejor. El problema, sin embargo, consiste en dilucidar si, para conseguir la tan deseada abundancia, existe algún método distinto del de acumular nuevos capitales. La retórica de los defensores del bienestar tiende deliberadamente a ocultar esta cuestión, la única que en verdad interesa. Pese a hallarse científicamente demostrado que la acumulación de nuevo capital es el único mecanismo capaz de impulsar el progreso económico, estos teóricos hablan de un supuesto «ahorro excesivo» y de unas fantasmagóricas «inversiones extremadas», aconsejando gastar más y, de paso, restringir la producción. Estamos, pues, ante los heraldos de

la regresión económica, ante gente que, aun sin quererlo, trabajan por la miseria y la desintegración social. La comunidad organizada de acuerdo con las normas del paternalismo podrá parecer justa desde un punto de vista subjetivo. Pero lo que no ofrece duda es que los componentes de tal sociedad irían empobreciéndose progresivamente.

La opinión pública del mundo occidental, durante una larga centuria, ha venido creyendo en la real existencia de eso que se ha dado en llamar «la cuestión social» y «el problema laboral». Con tales expresiones se pretende convencer a la gente de que el capitalismo es esencialmente perjudicial para los intereses vitales de las masas y, sobre todo, para trabajadores y campesinos modestos. De ahí que no se pueda tolerar la permanencia de un sistema tan manifiestamente injusto y que sea urgente aplicar las necesarias reformas radicales.

Pero la verdad es que el capitalismo no sólo ha permitido a la población crecer en grado excepcional, sino que además ha elevado el nivel de vida de un modo sin precedentes. La ciencia económica y la experiencia histórica proclaman unánimes que el capitalismo es el orden social más beneficioso para las masas. Los logros del sistema hablan por sí solos en tal sentido. La economía de mercado no necesita de corifeos ni de propagandistas. Se le pueden aplicar las célebres palabras del epitafio en la catedral de San Pablo de su constructor, sir Christopher Wren: *Si monumentum requiris, circumspice*¹².

¹² Si buscas su monumento, contempla cuanto te rodea.